

EL FORO VALENCIANO,

Revista de Legislacion y Jurisprudencia;

ORGANO OFICIAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS Y DE LA ACADEMIA VALENCIANA

DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

LEGISLACION HIPOTECARIA.

Observaciones al Real decreto de 30 de Julio último.

Si el decreto de 30 de Julio no se deroga, la ejecucion de la ley hipotecaria será la mayor calamidad que hubiera podido sobrevenir á este país.

Esta grave asercion de la Revista hipotecaria (1) encierra una tristísima y alarmante verdad.

La ley hipotecaria tan deseada, general y justamente aplaudida, ya lo hemos dicho otra vez, es la reforma mas radical del derecho patrio, de una importancia y trascendencia sumas.

Esa reforma, abraza todas las esferas del derecho, ya en sus explícitas disposiciones, ya en sus implícitas consecuencias; desde las modestas, aunque trascendentales costumbres y relaciones de familia, hasta las importantes cuestiones sociales que entrañan el modo de ser de los modernos pueblos.

Es ya proverbial é incuestionable lo vicioso é incompleto del sistema hipotecario vigente en España, y nosotros hemos sido constantes partidarios de su reforma.

¿A qué recordar ni por un momen-

to el peligro que hoy tiene la adquisicion de la propiedad raiz por ese sinnúmero de hipotecas legales, generales, tácitas, ocultas y privilegiadas, que pueden venir á anularla sin culpa del adquirente?

¿A qué recordar la dificultad de la trasmision, el estancamiento por consecuencia de la propiedad inmueble, su depreciacion y la postracion, ó mas bien dicho, la ausencia casi completa del crédito territorial?

¿A qué recordar, en fin, el desnivel que hoy existe entre el comercio é industria manufacturera y la industria agrícola, ausiliadas las primeras por la asociacion y el crédito, absorbiendo y movilizandó cuantiosos capitales; y abandonada la segunda á sus propias fuerzas, careciendo de los capitales necesarios para su aprovechamiento y progresivo desarrollo?

Si este fenómeno aconteciera en un país menos feraz, menos protegido por la naturaleza, menos agricultor que el nuestro, hubiera sido ya motivos de crisis lamentables que no podrían menos de sentirse, sino se estudia y se remedia oportunamente.

La ley hipotecaria venia á corregir los vicios del sistema antiguo, ofrecia grandísimas ventajas.

Admitiendo en ella el saludable

principio de la *publicidad* y de la *especialidad*, si en la apariencia aminora á la muger y al huérfano los excesivos privilegios, que por la antigua legislación les estaban concedidos, hace en cambio mas precisa, segura, eficaz y exigible la garantía de sus derechos, al par que evita los abusos, la odiosidad y los perjuicios que ocasiona el sistema vigente.

Facilitase al propietario la trasmision de sus raices y su adquisicion con seguridad al que quiere emplear en ellas el producto de sus trabajos y economías.

Con la publicidad y especialidad, se proporciona tambien una base segura y necesaria para el cálculo en todas las especulaciones que tengan por objeto la propiedad raiz; y se dá una garantía para el crédito basado siempre en la confianza, que nunca crece racional y duradera en lo desconocido.

Desde el momento en que se aleje toda dificultad en la trasmision de la propiedad, todo temor en su conservacion y adquisicion, toda duda en la naturaleza y estension de ella y de los demás derechos en que se fracciona ó descompone, que se llaman *reales* por ser parte de un todo real, la propiedad raiz podrá gozar de las ventajas del crédito y la agricultura, aprovechando ese talisman de la civilizacion, podrá alcanzar en su marcha progresiva á la industria manufacturera y al comercio, que tan plazeramente vemos desarrollarse en nuestra patria y que aumentarán su desarrollo, cuando se encuentre coadyuvado por el de aquella otra importante fuente de la riqueza pública.

Con la ley hipotecaria se ofrece segura y suficiente base para el establecimiento de los bancos territoriales, y aunque sea necesario y conveniente el completarlas con una ley de crédito territorial en que se lleven al último desenvolvimiento los principios de la ciencia económica respecto de estas instituciones, desde luego, y aun antes que exista tal complemento, podrán comenzar á funcionar dichas instituciones; que ya en muchas provincias de España están en proyecto ó preparadas para cuando rija la ley y respecto á las que el pais con instintivo conocimiento de sus necesidades ha tomado una provechosa y legítima iniciativa al solo anuncio de que la ley hipotecaria ofrecia al crédito la garantía de la publicidad y especialidad de los derechos reales.

Tambien el Gobierno, partiendo de igual principio, prepara trabajos para publicar la ley de crédito territorial, á los que pensamos consagrar algun artículo.

Con estas reformas y con estas nuevas instituciones puede tambien conseguirse un alto fin político; porque por medio de los bancos hipotecarios y sus obligaciones vendrá á interesarse en la propiedad raiz á un crecido número de ciudadanos á quien hoy no interesa directa y tangiblemente y vendrán á convertirse en defensores suyos muchos que no poseen finca alguna. ¿Quién sabe los rudos ataques que á la propiedad están reservados por ciertas escuelas? ¿Quién duda que es necesario aumentar el número de sus defensores para que les sea mas fácil el triunfo

con el que está enlazado el de la existencia social?

He aquí por qué la reforma consignada en la ley hipotecaria, la creemos no solo la mas radical del derecho patrio, sino de importancia y trascendencia sumas.

He aquí por qué deseamos y por qué aplaudimos una ley que tanto promete al desarrollo de la riqueza pública, á la moralizacion y al bienestar generales.

Publicada la ley por el poder legislativo, quedó al gobierno el difícil cuidado de plantearla, facilitando por medio de disposiciones transitorias, el cambio de sistema, tanto mas difícil cuanto mas radical.

En todas las diferentes aplicaciones de la ciencia de las leyes, merece siempre grandísimo cuidado la transición de un sistema á otro, para que no sufran los derechos adquiridos; para que la mejora que en cualesquiera escala se proyecte, no nazca lastimando intereses justamente creados, y para que no despierte antipatías, que, disputando su justicia, dificulten su obediencia.

Si de este precepto general hacemos aplicacion á los sistemas hipotecarios y meditamos por un instante que tienen por objeto la propiedad, una de las bases cardinales de la sociedad, no encontraremos exageracion en encarecer la meditacion y el estudio que merecen las medidas transitorias respecto este punto.

El planteamiento de la ley ofrecia inconvenientes que la práctica ha presentado mayores de lo que pudiera imaginarse, gracias á los medios que

se han escogitado para obviarlos, ó mejor dicho, por no haberse escogitado medios tan eficaces y radicales, como lo exigian la magnitud y la trascendencia de la reforma que se trata de establecer.

El medio escogitado por nuestros legisladores, para conseguir sin perjuicio de los derechos adquiridos, la publicidad completa, que los nuevos registros deben ofrecer, fue el disponer que al inscribir las fincas en estos se haga constar cuantas cargas les afecten.

Nosotros que hemos aplaudido la reforma de la ley por radical, hubiésemos querido que se hubiese comenzado por una nueva inscripcion de la propiedad, ó sea una confirmacion del dominio y de los demás derechos reales adquiridos y que no hubiesen caducado. Los inconvenientes que esto hubiera producido, no serian tan grandes como los que ofrece el sistema adoptado. Con método oportunamente establecido y declarando gratuita para los propietarios y poseedores de derechos reales la primera inscripcion y retribuyendo á los registradores, por medio de subvenciones proporcionadas, de los fondos del Estado, hubiérase conseguido realizarlo en corto plazo; pudiendo, al comenzar á regir la ley, prescindir por completo de los antiguos libros y evitando el involucrar los nuevos, con la trascripcion de anotaciones de aquellos, difusas y muchas veces inútiles é inconducentes.

Por el sistema adoptado, hácese necesaria la formacion de índices de los antiguos registros y están fuera de

toda exageracion las dificultades que su realizacion ha ofrecido y seguirá ofreciendo en la práctica.

Los Registradores de la propiedad no han desmentido la abnegacion é ilustracion de la clase facultativa á que pertenecen; sus trabajos y sus esfuerzos han sido improbables, pero ante las dificultades múltiples y casi invencibles que la multitud, incorreccion é insuficiencia de las anotaciones de los antiguos libros, el número de estos y el sistema con que están llevados, presentan para la formacion de los índices, no puede menos de hacer desmayar hasta á los mas instruidos y celosos de aquellos funcionarios.

El gobierno no les ha auxiliado como debiera haberlo hecho para tan impropio trabajo. Si puede defenderse el sistema adoptado por la ley para las primeras anotaciones; si puede disculparse la imprevision del gobierno y de la direccion del registro en todo lo relativo á la formacion de los índices, no tiene disculpa el que al conocerse por la experiencia la gravedad del mal, no se hayan adoptado energicos remedios.

Imponer á los Registradores la enorme carga de practicar por sí, abandonados á sus propios recursos todos los trabajos de transicion de un sistema á otro necesarios en los registros y á la formacion de los índices, al par que tienen que atender al movimiento diario que ocasiona la contratacion, en un cortísimo plazo, insuficiente apenas para hacerse cargo de sus archivos y adquirir el conocimiento práctico que les era indispensable, fue notable imprevision del Ministerio

de Gracia y Justicia y del centro directivo á cuyo cargo está el negociado de los registros de la propiedad.

Nosotros creemos que no hubiera sido prodigalidad el consagrar algunos millones para subvenciones extraordinarias á los registradores con el objeto de que pudieran dar cima á los trabajos de la formacion de los índices, con el ausilio de un personal inteligente y mucho mas numeroso que el que les permite tener el haberles de dotar de sus propios fondos, fondos insuficientes para ello en muchos registros, aun cuando invirtieran el producto total de sus honorarios.

La importancia del servicio público á que se hubiera destinado, valia la pena de algun modesto gasto.

Las consecuencias de no haber hecho esto ó algo parecido son tangibles para todos.

O la ley no podia plantearse hasta dentro de un plazo *larguísimo é indefinido*, ó habia de serlo sin que precediera la conclusion de los índices en todos los registros, cosa indispensable para que puedan inscribirse todas las cargas que sobre las fincas pesen y certificarse de ellas.

El conflicto no podrá ser mayor y el Ministro de Gracia y Justicia, creyendo salir de él por medio del Real decreto de treinta de Julio, le ha engrandecido de un modo que hubiera sido imposible imaginar.

Cuanto mas meditamos sobre el precitado decreto, mayor es nuestro asombro y quedamos anonadados al calcular los peligros inevitables de sus disposiciones, y al recordar que estas

han sido dictadas, *oidas la Comision de códigos y la Direccion del registro.*

¿Si los que han confeccionado la ley hipotecaria, con meditacion y sabiduría evidentes y los que digna y merecidamente están mas directamente encargados de vigilar sobre su aplicacion, han sancionado con su dictámen las disposiciones del R. D. cómo creer que acertamos al censurarle del modo mas enérgico que quepa hacerlo?

Pero no somos los primeros en hacerlo así y por desgracia la verdad de las cosas y la verdad de la ciencia está por encima de toda autoridad.

Los mismos motivos que existian desde el primer dia para prorogar el planteamiento de la ley hipotecaria, existen hoy. Si los medios adoptados los obvian debieron adoptarse el primer dia, si no los obvian, no ha debido plantearse la ley.

Pero no solo es que no los obvian; es que contradicen la letra y el espíritu de la ley hipotecaria, es que esterilizan indefinidamente las ventajas que ofrece y que nos hemos complacido en enumerar al comienzo de este artículo. Es que traerán la perturbacion á todos los propietarios y poseedores de derechos reales; es que suspenderán incontestablemente la contratacion, depreciarán de un modo insufrible la propiedad raiz y lejos de elevar el crédito territorial á la altura que debe tener en toda nacion y mas en la nuestra, cuya principal riqueza consiste en la propiedad inmueble, suspenderian por depronto y Dios sabe hasta cuándo el que hoy existe escaso y abandonado á especulaciones

particulares, haciendo imposible el establecimiento de las sociedades de crédito territorial, por mas que se esfuerce la iniciativa de las provincias y por mas que el gobierno consagre trabajos, hasta superfluos, como ha comenzado hacer.

Si el dia señalado, dice el artículo 1.º del real decreto, para que empiece á regir la ley, no estuvieren concluidos los índices con arreglo á lo prescrito en el artículo 48 del Real decreto de 31 de Enero último, y los registradores no pudieran inscribir por la imposibilidad de conocer y consignar las cargas que pesen sobre las fincas ó derechos sujetos á inscripcion, extenderán con arreglo al párrafo 8.º del artículo 42 de la ley hipotecaria, anotaciones preventivas que producirán en efecto hasta que se conviertan en inscripciones definitivas.

Que en muchos registros, que en los mas, no estarán los índices conclusos el dia señalado para comenzar á regir la ley, es cosa que ya nadie duda; y aun hemos oido asegurar que registro hay en que no podrán estarlo hasta dentro de algunos años, el de Valencia por ejemplo, si son nuestras noticias exactas á pesar de que son notorias la ciencia y conciencia de la persona encargada del Registro.

Que las anotaciones preventivas tal como se ordenan y con el carácter de duracion indefinida son contra el espíritu y contra la letra de la ley, basta demostrarlo lo que oportunamente se ha dicho en la Revista hipotecaria (1), nuestra ley y todas las basadas en el sistema de *publicidad* no pueden consentir que el primer asiento relativo á una finca; comiense por la

(1) Núm. 46, página 402.

anotacion preventiva la inscripcion publica la anotacion *anuncia*. La inscripcion hace conocer de un modo cierto, preciso y absoluto el estado de la propiedad, y con solo ella se pueden tener cuantos datos legales se necesitan para cualesquier cálculo sobre ella. Por el contrario, la anotacion preventiva suspende el juicio, detiene al comprador ó al prestamista y le hace esperar á que la inscripcion dé á los derechos la validez y seguridad que no tienen por la sola anotacion.

Pero no es esto lo mas censurable del Real decreto.

Su artículo 7.º dispone que: *En la primera inscripcion de propiedad que se haga de cada finca ó derecho real desde que rija la ley hipotecaria, y en las certificaciones de libertad que se espidan, se hará mencion no solo de los gravámenes y cargas que resulten claramente de los libros antiguos ó de los títulos presentados de nuevo para dicha inscripcion, sino de todos los en que exista el menor indicio de que se refieren á la finca ó derecho real que se inscribe, y de los que aparezcan responder los transferentes, aunque no conste la finca gravada.*

Con esta medida, lejos de conseguirse el propósito con que ha sido dictada, de salvar las dificultades que se ofrecian al planteamiento de la ley, viene, al par que á falsearla en una de sus bases cardinales, á aumentar aquellas hasta un punto que está fuera de todo cálculo.

Si difusa y dispendiosa habia de ser la primera inscripcion antes del Real decreto, muchísimo mas lo serán esas anotaciones, en que con el carácter provisional han de consignarse durante un plazo indefinido, no ya

las cargas que sobre las fincas existan clara y conocidamente, sino aquellas de las que exista el *menor indicio* que se refieran á la finca ó derecho real que se suscribe.

De suerte que al vender ó de cualesquier modo enagenar una finca ó un derecho real, aparecen cargadas ya no solo con aquellos gravámenes de que el propietario pudiera tener conocimiento y que realmente existieron, sino un sinnúmero de *gravámenes supuestos por indicios* mas ó menos fundados; esto refluirá en perjuicios y descrédito mas ó menos duradero de la finca, será en extremo dispendioso y dará lugar á cuestiones, reclamaciones y á procedimientos judiciales que todo reunido causará y sostendrá una desazon y malestar que suspenderá necesariamente la contratacion. Nadie querrá, sino en el último extremo, contratar respecto sus derechos reales, porque solo la última necesidad obligará á soportar tales gastos, disgustos y dispendios.

Y no solo se hará constar en *descrédito de las fincas y derechos reales* todos los gravámenes que el *menor indicio* haga suponer en las fincas aunque no pueda decirse cuándo ni por quién, ni para qué se impuso, ni aun positivamente si se impuso ó no; sino que bastará que uno de los poseedores haya en cualquier contrato hecho obligacion general de sus bienes y rentas sin concretarlo á finca alguna, cláusula, de estilo que apenas hay escritura que no contenga, para que en todas y cada una de sus fincas se haga constar, aunque fuera en un poder para conciliacion y juicios verbales, aunque sea

en un permiso para utilizar una alcaparilla.

Y que no se nos tacha de exagerados, porque la verdad práctica, si por desgracia no se deroga el Real decreto de 30 de Julio será mas estremada que las consecuencias que sus disposiciones hacen presentir.

Hoy es aun una cuestion científica; mañana, cuando sea una cuestion de hecho, acaso no será dable encontrar fácil salida; para retroceder como será de todo punto indispensable vale mas retroceder á tiempo, antes de que refluja en antipatia y odiosidad general contra el nuevo sistema hipotecario, lo que realmente no es culpa del sistema.

Otros graves defectos tiene el R. D. que, sin descender como alguien ha hecho á juzgar de su defectuosa redaccion, nos harian estender demasiado si hubiéramos de ocuparnos de ellos detalladamente; pero la impertancia de todos ellos desaparece ante los inconvenientes de las disposiciones del artículo 7.º

Concluiremos repitiendo las frases de la Revista Hipotecaria con que hemos comenzado este artículo. *«Si el Real decreto de 30 de Julio no se deroga, la ejecucion de la ley hipotecaria será la mayor calamidad que hubiera podido sobrevenir á este pais.»*

Eduardo Atard.

NECROLOGIA.

Con el fallecimiento del Sr. D. Atanasio Checa y Roa, la Magistratura española perdió uno de sus mas distinguidos miembros; el Colegio de Abogados de Valencia uno de sus mas

antiguos y respetables individuos; el pais un patricio benemérito, su familia un buen padre, y sus amigos, en cuyo número teniamos la honra de contarnos, sentimos una de las mas sensibles pérdidas, de las que un dia y otro van renovando las cosas y las personas á nuestro lado, en ese oleage continuo de la vida, que á la par é insensiblemente nos arrastra.

Parece ayer cuando saliendo de la escuela tomábamos por modelo para el ejercicio digno de nuestra noble profesion, entre otros y en primertérmino, á los señores D. Francisco Palau, D. Mariano Aparici, D. Francisco Labayla y D. Atanasio Checa á quienes la pública consideracion habia elevado á esa posicion, que en ninguna carrera del Estado es tan difícil de alcanzar, como en la carrera del Foro. Y esos tipos respetables han desaparecido de nuestro lado, siquiera su memoria no podrá nunca perderse entre los que les hemos conocido.

Si honrar á los muertos es un deber comun á la humanidad, nunca por ella desconocido, honrar á los que han sido nuestra honra, á los que han merecido nuestra consideracion y nuestro cariño, es un deber agradable al mismo tiempo que tristísimo.

En esta situacion de ánimo nos encontramos al ocuparnos del fallecimiento del Sr. D. Atanasio Checa.

Su nombre cuando se pronunciaba, era una prenda de imparcialidad y acierto en los negocios mas difíciles de piedad, cuando esta podia tener lugar, y siempre de probidad y de justicia.

Su carácter honrado y benévolo,

digno, jovial y modesto, le hacian tan simpático, como era respetado por la autoridad de su instruccion y su experiencia.

Nacido en 2 de Mayo de 1797 en Valhermoso, provincia de Guadalajara, podia ser reputado como valenciano, porque desde muy jóven ha permanecido en nuestra ciudad, enlazándose en ella con una familia distinguida, desempeñando numerosos cargos y prestando constantes y utilísimos servicios. Efectivamente, abandonando la carrera militar, á la que en sus primeros años pensó dedicarse llegando á ingresar como cadete en la Academia militar de la ciudad de San Fernando, en la que permaneció desde mediados de 1813 hasta 1814, se dedicó á la carrera de Leyes y obtuvo el título de Abogado en 1821. Incorporóse en el mismo año á nuestro Ilustre Colegio, al que nunca ha dejado de pertenecer, á pesar de cesar en el ejercicio de la profesion por haber sido nombrado Magistrado. En él obtuvo y desempeñó varios cargos, tales como examinador en diferentes años, contador y secretario de su Monte Pío y Decano en 1845, teniendo el número tres de antigüedad en el Colegio, cuando ocurrió su fallecimiento.

En 1821 fue nombrado por el ilustre Claustro de Leyes y Cánones, de esta Universidad Literaria Sustituto de la Cátedra del año séptimo de Leyes.

En 1834 y 35 desempeñó tambien los cargos de Vice-Contador-Fiscal, Contador-Fiscal y Conciliario segundo de la Academia de jurisprudencia, que con el nombre de *Academia de María Cristina*, existió por algun tiempo en

esta capital: cargos que cuando la instalacion de nuestra actual *Academia de Legislacion y jurisprudencia* le oimos mas de una vez recordar con complacencia al mismo tiempo que alentaba nuestro entusiasmo por el restablecimiento de aquella institucion, cuyas ventajas no pueden desconocer las personas ilustradas.

En 14 de Noviembre de 1834, fué nombrado Consultor letrado del tribunal de comercio de esta plaza; importante cargo, que desempeñó, sin interrupcion, hasta que en 1857, fué promovido á la plaza de Magistrado de la Audiencia de Albacete, siendo en 1859 trasladado á la de esta capital, de cuyo ayuntamiento habia tambien sido Abogado Consultor y Asesor de la curia Eclesiástica de este Arzobispado.

En el desempeño del cargo de Letrado consultor del Tribunal de comercio de esta plaza, es donde comenzó la reputacion del Sr. Checa á ser tan notable, que antes de su promocion á la Magistratura y desde 1841 hasta que esta tuvo lugar, mereció constantemente de la Excm. Audiencia del territorio el nombramiento para suplir ausencias y enfermedades de sus Magistrados, y su nombramiento de propietario fue generalmente considerado como un acto de justicia y de conveniencia pública. Efectivamente, el Sr. Checa, como Magistrado, ha sido una prueba evidente de lo conveniente que sería que en los altos puestos de la administracion de justicia se diera mas lugar del que generalmente se concede á las notabilidades del Foro.

El Sr. Checa, hijo adoptivo de Valencia, teniendo en ella numerosas

afecciones, familia, amigos, parientes é intereses, ha sabido sostener la difícil posición de ser no solo atento y consecuente con todos, sino afectuoso, natural y llano en su vida privada, sin faltar jamás ni en lo mas mínimo á las consideraciones que eran debidas al sacerdocio de la justicia.

Hombre ilustrado y de órden, amante de su país, partidario de las instituciones liberales se le ha visto constantemente desde 1823 pertenecer á la milicia Nacional en la que fué capitán en diferentes épocas, siguiendo los azares de la guerra, obteniendo el título de benemérito de la patria y otras distinciones.

Sócio de la de Amigos del País, de esa institucion cuyos provechosos trabajos, no serán nunca bastante encarecidos, desempeñó en ella numerosas comisiones y al tiempo de su muerte, presidia la que tiene encargo de promover la reforma de las cárceles de esta capital.

Nadie estrañará, que un hombre de tales condiciones, cuya vida siempre consagrada al servicio del país y cuyo carácter le habia rodeado de tantas simpatías, inspirase tan vivos cuidados durante su enfermedad, que á pesar de estar asistido y rodeado de su familia y de cariñosos amigos, mereció de sus compañeros los señores Magistrados, que establecieron en turno mediante el cual dos de ellos permanecieron constantemente á su lado durante los últimos días de su vida.

Terminó esta el 16 de Agosto último.

Celebrarónse el 17, presididos por el Excmo. Sr. Regente y Magistrados de

esta Audiencia, sus funerales con tan crecida concurrencia que fué patente muestra del aprecio general que merecia.

Nosotros vimos todas las clases de la sociedad, brillante y numerosamente representadas, muy particularmente la Abogacía y el Comercio.

Nuestra redaccion despues de cumplir con este deber, cumple con el último, consagrandó estas líneas, para consignar en nuestra revista el recuerdo de un compañero ilustre y el sincero sentimiento de su muerte.

Eduardo Atard.

CASO PRÁCTICO.

En 6 de Julio de 1850 se obligó T. por escritura de convenio con C., á suministrar alimentos á seis hijos de esta, por trimestres anticipados, á razon de dos reales diarios á cada uno y tiempo de ocho años; siendo condicion «si ocurriese la muerte de uno ó mas de los seis hijos de C., dejará esta de percibir la cantidad que respecto al que muriese faltase hasta el cumplimiento de dicha obligacion, la cual al vencimiento de cada plazo, *se impondrá* en la Caja banco, Fomento, ú otra parte donde á la seguridad proporcione mas beneficio. Cuyo capital depositado percibirán por partes iguales los sobrevivientes, cuando cumplan mayor edad, hayan de tomar estado, redimir la suerte de soldado, y otros semejantes, que ninguno ha llegado.»

En Febrero y Marzo de 1852 mueren dos de dichos menores; y no se reclaman, ni imponen sucesivamente á réditos las cantidades pertenecientes á los alimentos de estos.

Termina la obligacion en 6 de Julio de 1858, y el curador de los menores, otorga cartas de pago de toda la cantidad debida abonar, y recibida hasta entonces; y declara que T. re-

tiene en su poder el capital perteneciente á los alimentos de los dos menores difuntos.

Trascurridos algunos meses, el curador entabla demanda contra T. pidiendo la entrega del capital que retiene para hacerle producir réditos; y el ocho por ciento de estos, desde la muerte de los dos menores hasta la solución. El demandado, *forma artículo* de incontestación, por no estar legalmente declarados pobres los demandantes, en cuya clase se presentaban. No se dá lugar á él por el Juez del distrito de Serranos; pero apelada esta providencia, la Sala tercera la *revoca* sin expresa *condena de costas*. Se subsana el vicio, se reproduce la demanda, y T. contesta conformándose en la entrega del capital, pero no en el abono de rédito alguno, por no haberse impuesto semejante obligación, y que en el negado caso de creérsele responsable de la negligencia de otros, solo podría exigírsele un cinco por ciento anual sin aumento alguno, de manera que la demanda en todos casos contenía una *plus petición* que seguiría la condena de costas. Seguido el pleito por todos trámites, recayó

Sentencia.

«Se condena á T., al pago del capital (que se marca), uniéndose á dicha cantidad la que produzcan los réditos al cinco por ciento de toda ella, pero *entendiéndose* con arreglo al vencimiento de los plazos de tres en tres meses, y segun fueren *aumentando la cantidad* y unida á esta la que importen los réditos hasta 6 de Julio de 1858, á la principal desde entonces hasta que se verifique el pago, abonará por toda la que resulte el *seis por ciento ánuo*, condenándose además á T. en *todas las costas de estos autos*.»

Apelada en tiempo y forma, dicha Sala tercera la ha confirmado en todas sus partes.

Con suma impaciencia hemos esperado que se cumplimentara, para publicar la jurisprudencia que establece.

Convengamos en que la sentencia es justa en la parte que condena á T. al pago de capital y réditos.

¿Lo será tambien en los que se marca debe abonar?

¿Deberán imponérsele las costas?

Y pudo condenársele en todas las de autos?

Hé aquí tres cuestiones, cuya decision presenta una jurisprudencia inadmisibile para nosotros, por mas que la respetamos, y acatamos. Los considerandos de la sentencia solo fundan la parte de la misma que creemos justa; por consiguiente, á falta de base para discurrir sobre las otras, lo haremos por sus efectos ó consecuencias.

La decision de la primera equivale á establecer:

Que la ley de 14 de Marzo de 1856, tiene efecto retroactivo; y que con arreglo al espíritu de esta, puede interpretarse el art. 7.º y 2.º á que se refiere el mismo, no obstante el texto esplicito de ambos:

Por la segunda:

Que basta ser justa una demanda en parte de su petición, aunque en la restante, la ley y la misma Sentencia declaren que no lo es, para condenar al demandado en las costas.

Y por la tercera:

Que la ejecutoria recaida en incidente de un pleito, puede enmendarse por lo que recaiga á este.

Ahora bien; la obligación objeto del litigio es de 1850; y la retención de las cantidades á cuyo pago con sus réditos condena á T., principia en 1852 segun se ha manifestado. La base de la sentencia ha debido atemperarse á la legislación vigente á dichas fechas. Hasta la publicación de la ley de 14 de Marzo de 1856, regia la 22, Lib. 10, tit. 1.º de la Novísima Recopilación. Esta dispone:

«Ordenamos y mandamos, que todos los intereses causados hasta hoy que estuvieren por pagar, y los que de aquí adelante corrieren por cualesquiera contratos, obligaciones ó negocios en que conforme á derecho no se puedan pedir ó llevar intereses, aunque sean por mí aprobados no puedan pasar, ni escedan de un cinco por ciento al año; ni haya obligación de pagarlos

mas que á este respeto, sin embargo de cualesquiera pactos ó contratos que haya hecho, ó se hicieren, los cuales anulamos, y *prohibimos* como injustos, y usurarios; y solo las penas impuestas por derecho contra ellos; sin que se pueda sustentar, ni defender con ninguna causa, ni color de daño emergente ó lucro cesante; ni con otro algun pretesto, aunque sea en nombre de cambio; y revocamos, etc.

Con arreglo á esta disposicion única que juega en la primera cuestion señalada, solo pudo condenarse á T. al pago del cinco por ciento anual; es mayor la condena, luego la Sentencia dá efecto retroactivo á la ley citada de 14 de Marzo del 56, que quita la tasa al interés.

Y aun admitiendo semejante doctrina, todavía la sentencia hace claudicar también la disposicion del art. 7.º de la misma. «Durante el término del contrato, los intereses vencidos, y no pagados, no pueden devengar intereses. Trascurrido el plazo, los liquidos, y no satisfechos, podrán capitalizarse y estipular de nuevo réditos sobre el aumento del capital con sujecion á lo dispuesto en el art. 2.º» «Podrá pactarse convencionalmente interés, en el simple préstamo; pero este pacto será nulo, sino consta por escrito.»

T. no tenia contratado ni pagado réditos algunos; ni cuando terminó el plazo se capitalizaron los que se han declarado viene obligado á satisfacer; ni menos estipulado por escrito los que nuevamente debia abonar sobre ese aumento al capital; luego la declaracion de aumentar los réditos al capital al vencimiento de cada trimestre, no se amolda al texto esplicito de la disposicion de esta ley á que se dá efecto retroactivo.

Por la decision de la segunda cuestion, se declara implícitamente que T. tenia razon en parte: que no en todo era justa la demanda, pues se pedia el ocho por ciento de réditos y únicamente se conceden el cinco y el seis: por consiguiente, la oposicion era en manifiesta y legal defensa de sus derechos. T. no era un li-

tigante temerario. No se accede en todo á la demanda, ni á la esecpcion, parece no cabe condena de costas, á no ser que por la jurisprudencia inconcusa en todos los Tribunales se quiera sostener que la lleva consigo toda *plus petition*. Se han impuesto al que se hace esta, ha quedado sustituida la antigua jurisprudencia por la sentada antes.

Mas difícil es de explicar la establecida por la decision de la tercera cuestion propuesta; y aun puede dudarse si ha quedado establecida de hecho.

La sentencia confirmada en todas sus partes por dicha Sala, dice: «Se condena á T. en todas las costas de estos autos.» Ese *todas*, significa que también se le imponen las causadas en el incidente de incontestacion que se falló á su favor. Y en tanto es así, que el juez inferior, no obstante que se le hizo observar lo improcedente que seria interpretar así esa parte de condena, y de que resultaba por la tasacion incluida en la certificacion de la Superioridad que no se comprendian las costas de dicho incidente, mandó su pago; porque no se habia pedido aclaracion á su debido tiempo; y se ha realizado. Siendo mas particular, que librada otra certificacion con la tasacion del incidente, reclamando los curiales de la Superioridad el pago, del capital ganado por los demandantes previa audiencia del T. se ha acordado, y verificado de manera que esa parte de la ejecutoria, se ha cumplimentado por un mismo juez de *dos modos diametralmente opuestos*.

Favorecida hasta el presente la opinion del que suscribe por esta Audiencia, y por la de Madrid, en casi todos los fallos recaídos en los negocios cuya direccion se le ha confiado por espacio de 25 años, hubiera deseado esta vez que tan contrariada la ha visto, sostenerla ante el Supremo; porque resuelta por tan ilustrado Tribunal habria jurisprudencia fija á que atenerse y no resultaria la incertidumbre de si debemos ó no variar de opinion, y admitir la jurisprudencia que promete establecer la sentencia que sucintamente ha comentado.

Angel Azopardo.

ESTUDIOS LEGISLATIVOS,

POR MR. GUSTAVO ROUSET.

(Continuacion.)

La autoridad de una definicion se debe pues sacar exclusivamente de su *exactitud*, y no será su consecuencia mas que puramente doctrinal, ya emane del legislador ó de cualquier otro.

Esta es una proposicion que se apoya necesariamente sobre la naturaleza misma del poder y de la ley.

Importa sin embargo, para evitar toda equivocacion, distinguir bien entre la *definicion* ó determinacion *de los actos* que serán el objeto, el fin mismo de la definicion legal, y las *definiciones de las palabras* empleadas á determinarlos.

En legislacion, no hay, ya lo sabemos (núm. 49), mas que actos que *mandar* ó que *prohibir*. La descripcion que se dé constituirá desde luego, fácilmente se comprende, no ya una *definicion de palabras*, sino la *disposicion misma de la ley*, la *disposicion coercitiva* y obligatoria. Y lo que acabamos de decir del valor doctrinal de las definiciones *de palabras*, no seria de ningun modo aplicable á la *definicion de los actos*.

75. *Del modo de redactar las definiciones legales.* La legislacion toca al dominio de la doctrina por las definiciones, no tendrá pues que derogar consultando sobre este punto sus precedentes, y tomándole prestado su práctica y sus modelos.

Ninguna fórmula precisa podrá sin embargo, bajo este prisma, ser determinada de una manera absoluta; séanos permitido, á título de simple mencion, señalar muchas preferencias por las formas impersonales.—*Se entiende por.... Están comprendidos en....* que, oscureciendo, por decirlo así, la autoridad del legislador, dejarán al uso y á las tradiciones de la ciencia toda la responsabilidad de la definicion.

Sea como quiera: *indicativa*, *declarativa* ó *limitativa*, que sea la frase de la definicion corta, viva, penetrante, y no se embarace con términos técnicos, que tendrian tal vez ellos mismos necesidad de definir. Se encontrarán por otra parte con este objeto, indicaciones preciosas y modelos, lo mismo en nuestros Códigos, que en el título especial del Digesto *de verborum significatione*. No hay necesidad de insistir mas sobre esto.

76. *De la introduccion de las definiciones en los Códigos.*—Las definiciones de los términos de la ley, no siendo la ley, no deben desde luego figurar á su lado en nuestros Códigos. Su lugar natural será, como lo hemos dejado ya entrever (núm. 69), en la parte analítica de la esposicion de los motivos.

La manera de redactarlos, podrá sin embargo permitir que se le señale otro.

Despues de haber dado, en la esposicion de los motivos de cada ley, las definiciones de algunos de sus términos no veríamos en efecto ningun inconveniente, en que ordenase el legislador que se les reuniese por orden alfabético, en su conjunto especial. De este modo se formaria poco á poco un *Diccionario de las definiciones legales*, cuya utilidad y autoridad no serian puestas por nadie en duda.

Una por una, revisadas y corregidas por la accion incesante y progresiva de la costumbre de la jurisprudencia y de la legislacion, su redaccion se mantendria siempre en perfecta armonia con el estado de las costumbres, de la instruccion y del idioma; y la Academia, á quien esta alta mision está hoy dia por inadvertencia confiada, reconociendo sobre este punto su propia incompetencia y la aptitud particular del Cuerpo legislativo, aplaudiria incontestablemente esta prudente medida.

(Se continuará)

Por todo lo no firmado, el Secretario de la redaccion,
Manuel Atard.

Editor responsable: D. JOSÉ MARCO.

Valencia.
Imprenta de la Opinion, á cargo de José Domenech
calle de las Avellanas, núms. 11 y 13.